



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número:

Referencia: EX-2017-15966560-APN-DMEYD#AABE RESOL JGM RECHAZO RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO POR VERÓN AMADO OSCAR

VISTO el Expediente N° EX-2017-15966560-APN-DMEYD#AABE del registro de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO Organismo descentralizado en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, los Decretos N° 407 de fecha 14 de marzo de 1991, modificado por su similar N° 2.137 de fecha 10 de octubre de 1991, 1.382 del 9 de agosto de 2012, 1.416 del 18 de septiembre de 2013 y 2.670 de fecha 1 de diciembre de 2015, las Disposiciones N° 293 de fecha 12 de octubre de 2005 y N° 110 de fecha 15 de diciembre de 2011, ambas emanadas del ex ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES, y la Resolución Conjunta N° 410 de fecha 20 de diciembre de 2017 (RESFC-2017-410-APN-AABE#JGM) de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita el recurso de alzada en subsidio interpuesto por el Señor Amado Oscar Veron (D.N.I N° 11.418.802), contra la Disposición N° 110/2011 emanada del ex ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES.

Que mediante la Resolución Conjunta de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO N° RESFC-2017-410-APN-AABE#JGM de fecha 20 de diciembre de 2017, se procedió a rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por el señor Amado Oscar VERON contra la Disposición N° 110 de fecha 15 de diciembre de 2011 del entonces ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES, mediante la cual se resolvió el Boleto de Compraventa N° 450 suscripto entre los señores Amado Oscar VERON y Ramona Donata CORREA (D.N.I N° 11.627.020) con la ex DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO en fecha 20 de octubre de 1998, respecto del inmueble identificado como Casa N° 34, ubicado en la Calle N° 6 del Barrio GENERAL SAN MARTÍN (ex Campamento 1.000 Viviendas), en la Localidad de ITUZAINGÓ, Provincia de CORRIENTES.

Que el mencionado acto administrativo resolutorio fue debidamente notificado a los señores Amado Oscar VERON y Ramona Donata CORREA, mediante Nota N° 1.062 de fecha 28 de diciembre de 2012, a través de CORREO ARGENTINO, recepcionada por el recurrente con fecha 21 de enero de 2013, antelo cual, interpuso un “recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio” contra la Disposición citada en los

términos a los ya expuestos mediante recurso preliminar.

Que el artículo 73 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1.759/72 T.O. 2017, dispone que los actos administrativos de alcance individual a los que la autoridad hubiera dado o comenzado a dar la aplicación, podrán ser impugnados por medio de recursos administrativos.

Que la Disposición N° 110 de fecha 15 de diciembre de 2011 del entonces ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES, constituye un acto administrativo susceptible de ser impugnado por medio de recursos administrativos.

Que en ese sentido del contenido del escrito presentado por el señor Amado Oscar VERON, surge claramente la voluntad de impugnar la referida disposición, optando por interponer un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio que más allá de la deficiente nominación de la impugnación esta es formalmente procedente, correspondiendo, por aplicación al caso lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1.759/72 T.O. 2017, darle el correspondiente encuadre y tratamiento como recurso de alzada.

Que respecto de la cuestión de fondo planteada por el recurrente, sus fundamentos fueron analizados y resueltos de forma sucinta y determinante, y llevaron al dictado de la Resolución Conjunta N° RESFC-2017-410-APN-AABE#JGM de fecha 20 de diciembre de 2017 donde los hechos expuestos por el recurrente y la documental acompañada, en nada alteraron la motivación que tuvo en mira el organismo para resolver la operatoria de marras.

Que en el recurso de reconsideración interpuesto el recurrente se agravió por cuanto consideró que la citada Disposición N° 110/11, fue dictada sin pruebas suficientes, ocasionando de esta forma un agravio a su persona. Asimismo, solicitó que se revocara la Disposición atacada, en todas sus partes y se dictara una nueva observándose las pruebas que hacían a su derecho.

Que como surge de la Disposición recurrida, los días 30 de abril de 2010 y 20 de octubre de 2010 con motivo de las inspecciones efectuadas sobre la vivienda en trato, se constató que la misma era ocupada por el Señor Sergio GAONA y su familia en carácter de inquilinos de los titulares del Boleto de Compraventa.

Que el recurrente sostuvo que las mencionadas declaraciones no poseían ningún sustento documental y que fueron manifestadas por una persona que no tenía el deber jurídico de proceder con la verdad, ni era parte interesada en la relación contractual que unía a las partes. A tal efecto, adjuntó el Acta notarial N° 13 de fecha 24 de enero de 2013 extendida por el Escribano Pedro ZAPATA, del Registro N° 137, con asiento en la Ciudad de ITUZAINGÓ, Provincia de CORRIENTES, en el cual se dejaba constancia de los dichos del recurrente en cuanto a que tanto su ocupación efectiva como la de su hija, data desde hace más de veinte (20) años, como así también, del fin de las construcciones en la vivienda en cuestión.

Que en cuanto al agravio por el cual impugnó la veracidad del contenido y falta de documental respaldatoria de los hechos expuestos en las dos inspecciones efectuadas, su trámite recursivo resultó a todas luces improcedente, ya que solo este debe ser considerado contra el acto a que aquellas se refieren.

Ello es así toda vez que las actas de inspección labradas por un oficial público en ejercicio de su cargo, hacen plena prueba, erga omnes, acerca de la verdad de su contenido mientras no se demuestre lo contrario.

Que los hechos expuestos por el recurrente y la documental acompañada, en nada alteraron la motivación que tuvo en mira el organismo antecesor de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO para resolver la operatoria de marras, además de no contarse con la legalización por parte del Colegio de Escribanos Jurisdiccional de la firma de los notarios actuantes en la documentación aportada por el mismo.

Que en otro orden de ideas, la prueba que tendiera a mostrar la falsedad de los contenidos debía tener una entidad tal que produzca la convicción necesaria para revertir la presunción de legitimidad y veracidad que

emana de dichos instrumentos por su propia naturaleza. En cuanto a ello, la prueba arrojada se basa únicamente en la manifestación efectuada por el propio recurrente y las de un vecino suyo, las que fueron efectuadas con posterioridad a la disposición recurrida y que no gozan de valor probatorio, por cuanto el notario solamente da fe de que ellas se efectuaron, no de su sinceridad.

Que en lo que concierne a la ocupación, la Ley N° 22.423 refiere a una situación de hecho que no se ha cumplido en el caso de los titulares y de su grupo familiar, siendo las cuestiones planteadas ajenas e inoponibles a esta Agencia y por ende al ESTADO NACIONAL. Lo expuesto refuerza la decisión administrativa adoptada, en cuanto los compradores han incumplido con el destino para el cual se ha procedido a la venta del inmueble.

Que el recurrente también adujo cuestiones personales y de salud, acompañando copias simples a tales efectos, correspondiendo señalar que éstas no solo carecían de por sí de aptitud probatoria y por lo tanto inadmisibles como expresión de voluntad, sino que, además, no enervaban el criterio expuesto oportunamente por el Organismo emisor del acto impugnado.

Que en lo que respecta al pago de la vivienda, el Señor Amado VERON adujo que mientras se encontraba en buen estado de salud fue abonando las cuotas y que solo en un corto lapso no pudo cancelar las mismas.

Que tal como establece el Boleto de Compraventa en su Cláusula Segunda, el pago es un requisito esencial de la operación concertada.

Que del informe suministrado por la Dirección General de Administración aún antes del dictado de la Disposición recurrida surge que los compradores se encontraban en mora en el cumplimiento de las obligaciones de pago asumidas y, de igual modo, la misma Dirección mediante Memorando N° 466 de fecha 5 de agosto de 2015 informó que la situación de mora se mantenía.

Que en modo alguno el fundamento esgrimido por el recurrente y la prueba adjuntada, desvirtúan el incumplimiento contractual en que ha incurrido.

Que cabe señalar estos no fueron los únicos incumplimientos en que incurrieron los compradores y que dieron motivo al dictado de la Disposición atacada, sino que también los compradores no contrataron el seguro contra incendio y destrucción total derivados de hechos propios o de terceros, que resguarde el inmueble, con póliza endosable a favor del ESTADO NACIONAL de acuerdo a lo acordado en la Cláusula Sexta del instrumento respectivo.

Que habiéndose analizado en esa instancia administrativa la procedencia formal y los fundamentos esbozados por el recurrente se concluyó que resultaba procedente sostener los principios de legalidad y razonabilidad de la Disposición N° 110 del ex ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES y por ello correspondía rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Señor Amado Oscar VERON.

Que todo ello ha sido materia de análisis en el tratamiento del recurso de reconsideración interpuesto por el señor Amado Oscar VERON, que fuera rechazado por la Resolución Conjunta N° RESFC-2017-410-APN-AABE#JGM de fecha 20 de diciembre de 2017, debidamente notificada mediante Nota NQ2018-01694012-APN-DAC#AABE y recepcionada por el recurrente en fecha 22 de enero de 2018.

Que con posterioridad a la notificación de la mencionada Resolución el recurrente no efectuó presentación alguna, mejorando o ampliando los fundamentos vertidos en el escrito recursivo.

Que en razón de las consideraciones expuestas se estima que la impugnación formulada por el señor Amado Oscar VERON, contra la Disposición ONABE N° 110 emanada del ex ORGANISMO NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO de fecha 15 de diciembre de 2011, dictada en el marco de la normativa aplicable en la materia, no puede prosperar, correspondiendo el rechazo del recurso de alzada interpuesto en subsidio al de reconsideración, ratificando la misma en todos sus términos.

Que mediante el IF-2019-14672285 la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por el Artículo 96 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1.759/72 T.O. 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Recházase el recurso de alzada interpuesto en subsidio al de reconsideración por el Señor Amado Oscar VERON (D.N.I. N° 11.418.802), contra la Disposición N° 110 emanada del ex ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES, ente antecesor de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, organismo descentralizado en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS de fecha 15 de diciembre de 2011, por las razones expuestas en los considerandos de la presente medida.

ARTÍCULO 2º.- Hágase saber al interesado que el presente acto agota la vía administrativa, quedando expedita la acción judicial, la que podrá ser interpuesta dentro del plazo de NOVENTA (90) días hábiles judiciales a contar desde la notificación de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese al Señor Amado Oscar VERON el dictado de la presente medida.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y archívese.